

**DICTAMEN 5/2009 DEL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE ANDALUCÍA AL ANTEPROYECTO DE LEY
DEL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN EN ANDALUCÍA**

*Aprobado por el Pleno en sesión celebrada
el día 23 de marzo de 2009*

Índice

- I. Antecedentes**
- II. Contenido**
- III. Observaciones generales**
- IV. Observaciones al articulado**
- V. Conclusiones**

I. Antecedentes

La Ley 5/1997, de 26 de noviembre del Consejo Económico y Social de Andalucía, en su artículo 4.1 establece la función de emitir, con carácter preceptivo, informes sobre los anteproyectos de Leyes que regulen materias socioeconómicas y laborales.

En este sentido, el pasado día 2 de marzo de 2009 tuvo entrada en el Consejo Económico y Social de Andalucía escrito de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, solicitando la emisión de Dictamen al Anteproyecto de Ley del Desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía.

En la sesión de la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de Andalucía, celebrada el día fecha 2 de marzo de 2009, se acordó su traslado a la Comisión de Trabajo de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

II. Contenido

El Anteproyecto de Ley del Desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía sobre el que este Consejo Económico y Social de Andalucía emite Dictamen, viene a desarrollar el objetivo establecido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía para la incorporación del pueblo andaluz a la Sociedad del Conocimiento y el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías (Artículos 10.3.12º, 34, 37.1.15º, 56.2 y 69.4).

La consolidación de la Sociedad de la información se contempla como un instrumento para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, que tras los notables progresos tecnológicos logrados en los últimos años entran en una nueva fase de despliegue masivo y de integración en nuestra manera de trabajar, vivir e interactuar, y ello exige unas políticas proactivas que den respuestas a los cambios fundamentales operados.

El Parlamento de Andalucía califica el conocimiento y la innovación de motores del crecimiento sostenible, y considera que es imprescindible construir una Sociedad de la Información plenamente integradora, basada en la generalización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los servicios públicos, las PYME y los hogares.

Se persigue pues desarrollar los elementos esenciales para promover el tránsito de la Sociedad de la Información hacia la Sociedad del Conocimiento, partiendo de apreciar la necesidad de establecer un nuevo marco normativo construido sobre el compromiso de la ciudadanía andaluza por el fortalecimiento de la Sociedad de la Información en Andalucía, que reduzca los obstáculos para su implantación, ofrezca servicios públicos eficientes y de calidad y promueva la calidad de vida de la ciudadanía.

Este texto legislativo pretende promover un desarrollo equilibrado de las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de la ciudadanía, el fortalecimiento de la sociedad y el apoyo de la competitividad y productividad en el desarrollo económico, al tiempo que crear un entorno favorable al

fortalecimiento de la Sociedad de la Información.

La actuación pues de la Administración de la Junta de Andalucía irá dirigida, preferentemente, a habilitar medidas y acciones que garanticen la efectividad de los derechos y la igualdad de oportunidades, así como el acceso equitativo al conocimiento y a los beneficios de las nuevas tecnologías.

El texto normativo consta de 61 Artículos, estructurados en un Título Preliminar, cuatro Títulos, una Disposición adicional única, una Disposición derogatoria única y dos Disposiciones finales, precedido todo ello de la Exposición de Motivos.

El contenido de cada título y de las disposiciones es el siguiente:

TÍTULO PRELIMINAR. “DISPOSICIONES GENERALES” (Artículos 1 a 6)

En él se establecen tanto el objeto de la Ley, como las definiciones de los principales términos que en ella se recogen, los fines y objetivos de la norma, así como su marco regulador y los principios informadores de la misma y se refleja la adscripción a una dimensión ética y social de la Sociedad de la Información en Andalucía.

TÍTULO I. “CIUDADANÍA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN” (Artículos 7 a 15)

Este título versa sobre los mecanismos para incrementar las capacidades y responsabilidades tecnológicas de la ciudadanía andaluza, así como para neutralizar las causas que provocan la exclusión o brecha digital.

Capítulo I. Derechos de la ciudadanía (Artículos 7 a 11)

Regula los derechos de la ciudadanía en relación a los servicios digitales sobre la formación y al aprendizaje digital, la participación, la seguridad y privacidad y los derechos digitales ante las Administraciones Públicas.

Capítulo II. Medidas para promover el desarrollo de la Sociedad de la Información (Artículos 12 a 15)

Afronta las medidas de los poderes públicos para promover la sensibilización, formación y participación, el fomento del acceso a Internet y a los servicios electrónicos así como medidas de impulso a la solidaridad digital.

TÍTULO II. “UNA SOCIEDAD GLOBAL CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS” (Artículos 16 a 37)

Este título, básicamente viene a regular la adaptación de la Administración a los nuevos servicios de la Sociedad de la Información y la aplicación de la gobernanza en la gestión de los asuntos referidos a la nueva sociedad tecnológica, promoviendo así la globalidad de la sociedad con estos nuevos aportes.

Capítulo I. La Administración en la Sociedad de la Información (Artículos 16 y 17)

En él se establecen los principios rectores y las bases de la Administración de la Junta de Andalucía en la Sociedad de la Información, así como los elementos estratégicos de la participación democrática en línea.

Capítulo II. La gobernanza de la Sociedad de la Información (Artículos 18 a 25)

Se configura el ejercicio de la gobernanza para la administración de la Sociedad de la Información y se ordena la estructura organizativa y planificadora de las administraciones públicas en la gestión de los asuntos referidos a la materia.

Además, regula el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía, que se constituye como el instrumento y marco de programación y planificación de las políticas públicas de la Administración de la Junta de Andalucía en relación con los elementos esenciales para promover el fortalecimiento de la Sociedad de la Información.

Capítulo III. Las bases de la salud digital (Artículos 26 a 28)

Desarrolla el sistema de información asistencial, los servicios tecnológicos de salud y la interoperabilidad de los sistemas de información sanitaria.

Capítulo IV. Las bases de la educación en la Sociedad de la Información (Artículos 29 a 31)

Establece las líneas de promoción y fomento de la educación e integración de las nuevas tecnologías en la Sociedad de la Información.

Capítulo V. La justicia digital (Artículo 32)

Regula los servicios de la Administración de la Junta de Andalucía para la ciudadanía, los profesionales del derecho y de la Administración de Justicia.

Capítulo VI. El patrimonio digital (Artículos 33 a 35)

Establece el marco del patrimonio digital, y determina el derecho de acceso de la ciudadanía al patrimonio digital.

Capítulo VII. La cooperación digital (Artículos 36 a 37)

Marca las líneas de la cooperación digital y el ejercicio del voluntariado digital.

TÍTULO III. “EL APOYO A LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA” (Artículos 38 a 44)

Afronta la difusión de las ventajas competitivas de las TIC en las empresas andaluzas, impulsa la formación del tejido empresarial sobre las TIC así como su necesaria integración en los procesos de producción y negocios como instrumento de mejora de la productividad y competitividad.

La norma promueve el fomento de la innovación, la cooperación y las alianzas entre empresas, el teletrabajo, la

integración de las TIC en las empresas y el fortalecimiento del sector TIC en Andalucía.

TÍTULO IV. “LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN” (Artículos 45 a 61)

Representa el elemento transversal de la ley, al aportar los recursos e infraestructuras adecuadas para desarrollar la Sociedad de la Información en Andalucía.

Capítulo I. La financiación pública de la Sociedad de la Información (Artículos 45 a 47)

Se centra en la financiación y las inversiones del sistema.

Capítulo II. El desarrollo de las infraestructuras de las telecomunicaciones (Artículos 48 a 61)

Establece el sistema de infraestructuras de telecomunicaciones de Andalucía, para promover el acceso universal del servicio de comunicaciones electrónicas, favoreciendo el desarrollo de un sistema de telecomunicaciones que articule el conjunto del territorio andaluz internamente, favoreciendo la equidad territorial y el acceso universal a servicios avanzados en banda ancha.

Determina también la obligación de las operadoras de telecomunicaciones de presentar un Programa de Infraestructuras de telecomunicaciones que contemple las infraestructuras existentes y las previsiones de implantación y desarrollo de la red.

Además, recoge el fomento por parte de la Administración andaluza de la celebración de acuerdos voluntarios entre las operadoras para la ubicación y uso compartido de infraestructuras de telecomunicaciones, con el objeto de racionalizar y rentabilizar su uso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Planes generales

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo Reglamentario.

Segunda. Entrada en vigor.

III. Observaciones generales

El presente Anteproyecto de Ley del Desarrollo de la Sociedad de la Información de Andalucía pretender dar un paso más en la puesta en práctica del derecho reconocido en el artículo 34 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de “acceder y usar las nuevas tecnologías y participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación, mediante los medios y recursos que la ley establezca”.

Con carácter general el CES de Andalucía valora muy positivamente las iniciativas de los poderes públicos dirigidas a la consecución del objetivo básico estatutario, recogido en el artículo 10.3 12º, de “la incorporación del pueblo andaluz a la sociedad del conocimiento”. El acceso de la ciudadanía andaluza a las nuevas tecnologías y al conocimiento ha de contemplarse como un instrumento esencial para el desarrollo de nuestra comunidad. El avance en el uso de las tecnologías de la información y la generalización de las comunicaciones ha de entenderse como una oportunidad de crecimiento, a la vez que pueden favorecer la construcción de una sociedad más solidaria, plural, integradora y participativa, facilitando la cohesión social de aquellas personas con menores posibilidades.

También se es consciente de que en el cumplimiento de sus cometidos la Comunidad Autónoma de Andalucía debe mostrar un escrupuloso respeto a la distribución competencial dimanante de nuestra Constitución; distribución de competencias que, en relación a las materias afectadas por el presente Anteproyecto de Ley se traduce en la atribución en exclusiva al Estado (ex artículo 149.1.21º CE) de la competencia relativa a las telecomunicaciones y al régimen general de comunicaciones.

Por su parte, el artículo 56.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que “corresponde a la Comunidad la competencia sobre las condiciones de los edificios para la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, radiodifusión, telefonía básica y otros servicios por cable, respetando la legislación del Estado en materia de comunicaciones”; el artículo 58.1.2º le asigna a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en el “régimen de las nuevas tecnologías

relacionadas con la sociedad de la información y del conocimiento, en el marco de la legislación del Estado”; y, finalmente, el artículo 69.4 señala que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía “la competencia compartida sobre ordenación y regulación y el control de los servicios de comunicación audiovisual que utilicen cualquiera de los soportes y tecnologías disponibles dirigidos al público de Andalucía, así como sobre las ofertas de comunicación audiovisual si se distribuyen en el territorio de Andalucía”.

En resumen, el Anteproyecto de Ley sometido a Dictamen deberá tener en consideración, entre otras, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, lo que, evidentemente, incide en el alcance y contenido de sus preceptos. No obstante, y con independencia de lo anterior, el Anteproyecto dictaminado adolece de un exceso de laconismo, indeterminación y buenas intenciones impropios de una norma jurídica.

El objeto de la Ley manifestado en su artículo 1 de “establecer el régimen jurídico de los servicios y elementos esenciales para promover el desarrollo de la Sociedad de la Información y favorecer la puesta en valor de su potencial al servicio del interés público y el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía andaluza” no se corresponde con el contenido y naturaleza de los preceptos que conforman su articulado. Como ya puso de manifiesto la Consejería de la Presidencia en su Informe de 12 de abril de 2007, el Anteproyecto está plagado de expresiones más propias de un programa de políticas públicas o de un plan de actuaciones que de un texto jurídico. La falta de determinación legal obligará a un uso excesivo e inadecuado de la norma reglamentaria, a la que ya la Ley se remite en alguna ocasión específicamente (art. 21.2), lo que puede ocasionar ciertos problemas de vacíos reguladores y contribuir a la desnaturalización del texto examinado.

Por otra parte el carácter genérico y poco preciso del Anteproyecto dificulta la comprensión teleológica de la norma, sin que la reiteración en preceptos sucesivos de los objetivos, principios y fines de la misma ayuden a concretar cuál es su finalidad última y a través de qué instrumentos pretende alcanzarse.

En línea con lo anterior y en aras de una mayor seguridad jurídica habría que evitar la utilización de conceptos indeterminados o expresiones ambivalentes que dificultan la labor interpretativa e incluso pueden generar expectativas de derechos no buscadas. Así, expresiones como “administración inteligente” (art. 23.3.c), “necesidades de la ciudadanía” (art. 12), “fondos necesarios” (art. 33.1), “patrimonio turístico” (art. 34), entre otras, incorporan nociones vagas y genéricas, sin referentes normativos nítidos, poco adecuadas, en suma, desde el punto de vista jurídico. Del mismo modo, la falta de correspondencia y homogeneidad en las expresiones utilizadas, a veces incluso dentro de un mismo precepto, puede dar lugar a problemas aplicativos importantes y así, a título de ejemplo, de la redacción del artículo 24 no queda claro si lo que se regula es el Plan Director de Telecomunicaciones de Andalucía, de la Junta de Andalucía o simplemente el Plan Director de Telecomunicaciones sin mayores pretensiones de concreción territorial o de ámbito de actuación.

En la consecución de una Sociedad global con las nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la Sociedad de la Información la Ley asigna importantes cometidos y actuaciones a las Entidades Locales territoriales (art. 25), lo que debe verse acompañado de la correspondiente y necesaria dotación de medios y recursos.

Asimismo, sería conveniente una revisión general de carácter ortográfico y gramatical del texto, incluido el análisis de los signos de puntuación. En este sentido es absolutamente necesario la uniformidad en las denominaciones, especialmente respecto a los siguientes términos y expresiones: Sociedad de Información (art. 20 o 22) y Sociedad de la Información (art. 23 entre otros); ciudadano y ciudadana (art. 26 o 49) y ciudadanía (art. 3 entre otros muchos).

IV. Observaciones al articulado

Exposición de Motivos

Consideramos importante destacar en la Exposición de Motivos la necesidad de apostar por la Concertación Social en la formulación de todo tipo de políticas públicas en nuestra Comunidad Autónoma, incluida las relativas a la materia objeto de la presente Ley. Los artículos 10.3.20º y el 159 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconocen la función relevante que las organizaciones sindicales y empresariales más representativas cumplen en la consecución del objetivo básico del diálogo y la concertación social, de ahí que sea necesario apostar explícitamente por el fomento de este consenso y así dar cumplimiento a lo establecido en nuestro Estatuto de Autonomía.

Por otra parte, en relación al desarrollo económico y a la integración de las TIC en el tejido productivo y empresarial la norma parece inclinarse hacia un modelo determinado de desarrollo como es el cooperativo. Sin perjuicio y con independencia de la importancia de este concreto modelo de desarrollo, parece más adecuado, dado los objetivos amplios, globales y omnicomprensivos de la norma, apostar e incentivar el desarrollo económico de las empresas en general, sin menciones específicas a “la cooperación o las alianzas entre empresas”.

Desde otra perspectiva, el desarrollo progresivo de la Sociedad de la Información y de las medidas concretas de ejecución de esta Ley significará la creación y expansión de nuevas formas de prestación de servicios ligadas a las TIC (teletrabajo -art. 43-, personal de los Centros de acceso a Internet -art. 61-) para las que se deben garantizar el conjunto de derechos económicos y laborales que la normativa heterónoma y, muy especialmente, la negociación colectiva reconocen.

Asimismo, en aras al mejor uso del lenguaje, recomendamos una corrección gramatical general de la Exposición de Motivos de la Ley, pues en ella figuran discordancias y errores como “un economía”, “obtención del resultados”, “si no” en lugar de “sino”. Otras expresiones deberían ser modificadas pues no parece apropiado utilizar la primera persona del plural a la hora de definir y justificar el contenido de la Ley en la Exposición de

Motivos (“concebimos”, “construimos”); de lo que se trata es de resaltar lo que la propia Ley lleva a cabo, por lo que es preferible el uso de la tercera persona del singular. En idéntica línea, debería revisarse la redacción del primer párrafo del apartado IV de la Exposición de Motivos pues no se comprende bien qué se quiere indicar con la diferenciación entre títulos de contenido y título horizontal, como si este último careciera de contenido.

Artículo 1. Objeto

Apartado 1

Teniendo en cuenta el alcance y título del Anteproyecto de Ley, al definir su objeto debería concretar su ámbito territorial, por lo que se propone incluir en el apartado 1 del precepto la expresión “*en Andalucía*”.

La redacción que se propone sería la siguiente:

“1. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de los servicios y elementos esenciales para promover el desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía...”

Apartado 3

Asimismo, en la letra b) de este apartado se propone incluir una referencia expresa a las organizaciones más representativas de la ciudadanía, quedando el mismo con el siguiente tenor:

“b) La incorporación de las TIC en el ámbito de la ciudadanía, de sus organizaciones más representativas, de las empresas, de las Universidades y las Administraciones Públicas Andaluzas”.

Artículo 2. Definiciones

La inclusión en un texto normativo del significado de los principales términos en él utilizados cumple la función principal de precisar el alcance jurídico y el límite exacto de las prescripciones establecidas. En esta ocasión ni los términos definidos ni la definición ofrecida parecen responder a esta finalidad por lo que su justificación normativa es discutible. Con todo, de optarse por su inclusión debería procurarse la

utilización de definiciones cerradas, acabadas y claras. En concreto, la última frase de la letra c) recoge una mera apreciación que como tal debería suprimirse. Una alternativa posible sería la de trasladar, como hace la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el contenido del artículo 2 a un Anexo final de definiciones.

Desde otro punto de vista, la opción a favor de la incorporación de una lista de términos objeto de definición ocasiona el problema adicional de seleccionar qué términos se incluyen y cuáles no. En tal sentido, teniendo en cuenta que entre los fines recogidos en el artículo 3 del Anteproyecto figura el de “promover la gobernanza electrónica en Andalucía”, parece conveniente incluir en la relación de definiciones la expresión “gobernanza electrónica”. Una posible definición podría ser la de “sistema democrático relativo a la información y la comunicación tecnológica cuya finalidad es proporcionar o mejorar los servicios públicos”. En similar sentido, aunque sí figura la definición de “brecha digital” no ocurre lo mismo con las expresiones “brecha digital multiforme” (art. 25.1.a) o “acceso o sistema multicanal” (art. 13.d y art. 14.1), ambas de difícil y ambigua comprensión por lo que se recomienda su inclusión entre los términos definidos.

Finalmente, en la definición de “brecha digital” se debe corregir el término “*quines*” y recoger el de “*quienes*”.

Artículo 3. Fines

Teniendo en cuenta que en el artículo 1 se recoge el objeto de la Ley, en el artículo 5 sus objetivos, en el artículo 6 sus principios informadores y en el artículo 3.1 sus fines esenciales, parece conveniente eliminar el apartado 2 de este precepto. Su redacción es algo confusa, más adecuada para la Exposición de Motivos que para el articulado de la Ley y no añade sino reiteración a lo que ya se ha precisado convenientemente.

Artículo 6. Principios informadores

La letra b) alude a principios excesivamente generales, predicables del conjunto del ordenamiento jurídico y de la actuación de los poderes públicos en general, por lo que parece conveniente su eliminación en tanto

no inciden ni especial ni exclusivamente sobre el contenido de la Ley ni en el fortalecimiento de la Sociedad de la Información en Andalucía.

En la letra c) el término “*asequibilidad*” debería sustituirse por el de “*accesibilidad*”, que es el que aparece en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y sustituir el término “*equidad*” por el de “*igualdad*”, más acorde con los principios generales que se busca garantizar.

Artículo 7. Derecho al acceso de la ciudadanía a los servicios digitales

En el apartado 1 de este precepto parece aconsejable sustituir la expresión “*se hace efectivo el derecho*”, por la de “*se pretende garantizar el derecho*”, al gozar esta última de un valor jurídico más acabado.

Artículos 8 y 9. El derecho de la ciudadanía a los servicios digitales. Derecho a la participación digital

La utilización del tiempo futuro en el reconocimiento de los derechos pueda dar lugar a confusión y a interpretaciones *a sensu contrario* en el sentido de que si se tendrá en el futuro es que el derecho aludido no se tiene ahora, ni con esta Ley, por lo que deberá esperarse a una actuación posterior para que dicho derecho sea una realidad. Por ello, consideramos preferible el uso del tiempo presente. Así, el artículo 8 debería decir “*la ciudadanía **tiene** el derecho de dotarse de habilidades y capacidades...*”; y, en igual sentido, el artículo 9 debería señalar que “*la ciudadanía andaluza **tiene** derecho a la participación digital...*”.

Por otra parte se observa una falta de uniformidad entre los dos preceptos a la hora de referirse al sujeto titular del derecho que, en un caso es la “*ciudadanía*” sin más y en otro la “*ciudadanía andaluza*”, por lo que parece conveniente unificar la expresión en uno de los dos sentidos.

Asimismo, aunque el artículo 9 se titula de forma genérica “Derecho a la participación digital”, alude solamente al ejercicio colectivo del mismo por lo que se propone la inclusión expresa de la vertiente individual del derecho a la participación digital, que conformaría el apartado 1 del precepto. El actual contenido del artículo 9 sería su nuevo apartado 2 y en él se propone, al objeto de resaltar y papel y la función que las

organizaciones económicas y sociales cumplen en cualquier faceta del desarrollo social modificar su redacción en el siguiente sentido: *“La ciudadanía andaluza tendrá derecho a la participación digital en condiciones de igualdad a través de las organizaciones sociales y económicas y de cualquier otro tipo de asociación que puedan promover la comunicación...”*.

Artículo 10. Los derechos digitales de la ciudadanía ante las Administraciones Públicas Andaluzas

El precepto reitera y remite a lo previsto en una Ley estatal, en concreto en el artículo 6.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; precepto que, según la Disposición final 1ª de la citada Ley tiene el carácter de básico al amparo de lo fijado en el artículo 149.1.18º de la Constitución. Por ello, la opción normativa más adecuada sería la del desarrollo del derecho ya reconocido en la norma estatal, como hace, por ejemplo, el artículo 7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, y no la simple reiteración de lo ya garantizado normativamente.

Se recomienda, por tanto, su supresión.

Artículo 11. Derecho a la seguridad y a la privacidad

Apartado 1

Se menciona exclusivamente la preservación de la seguridad y privacidad de la información personal en relación a su difusión a través de internet por lo que se propone la extensión de la citada garantía a la difusión de la información mediante cualquier otro medio. En concreto se propone añadir al apartado 1 del precepto la siguiente frase final *“... o de cualquier otro medio que forme parte de la Sociedad de la Información”*.

Artículo 12. Sensibilización, Formación y Participación

Apartado 1

En la letra b) de este apartado se propone la sustitución de la expresión “*desarrollo del portal público*” por la de “*desarrollo de **un** portal público*”.

Por otro lado, dado el sentido de la letra d) parece conveniente sustituir el término “*industria*” por el de “**empresas**”. La redacción propuesta sería la siguiente:

*“d) Fomento del interés de las **empresas**, en particular de las pequeñas y medianas (PYME), por ofrecer servicios y aplicaciones que satisfagan las necesidades expresadas por la ciudadanía”.*

Artículo 13. Medidas de fomento de acceso de la ciudadanía a Internet

Se propone la modificación de la redacción del inicio del precepto en los siguientes términos:

*“En relación al derecho de la ciudadanía al acceso a los servicios de la Sociedad de la Información, la Administración de la Junta de Andalucía promoverá el acceso universal a las nuevas tecnologías y la reducción de la brecha **digital** y cognitiva, y con esta finalidad desarrollarán las siguientes medidas”.*

La adición de la palabra «digital» mejora, a nuestro entender, la cobertura de la Ley, ya que, como se define en el artículo 2, la expresión «brecha cognitiva» se considera un concepto más concreto devenido de la expresión más amplia «brecha digital». Por otro lado, las concretas medidas propuestas parecen que se encaminan tanto a la reducción de la brecha cognitiva como a la de la brecha digital.

Por otra parte, dado que con posterioridad se regulan con más detenimiento diversas cuestiones relacionadas con los Centros de Acceso Público a internet (artículo 61) contemplados en este precepto, parece conveniente realizar la correspondiente remisión.

Artículo 15. Medidas de impulso del principio de solidaridad digital

Apartado 2

Se propone modificar la redacción de la letra a) de este apartado a fin de completar su contenido y delimitar más nítidamente el sentido de las actuaciones y actividades que en él se prevén. La redacción propuesta es la siguiente:

*“a) Fomentar la utilización de las TIC y las nuevas tecnologías de uso generalizado, en especial Internet, o cualesquiera otros derivados de la Sociedad de la información, por parte de las personas menores de edad, así como promover y **velar por** la seguridad y prevención de los riesgos que se puedan derivar de un uso inadecuado de las mismas”.*

Artículo 16. Los principios rectores de la Administración de la Junta de Andalucía en la Sociedad de la Información

Apartado Tercero

En relación con el punto 1 de este apartado (La Administración articulada en red) consideramos que la ordenación de la Administración de la Junta de Andalucía en forma de una red digital debe contribuir, además de a la eficiencia y calidad del servicio público, a la agilidad del mismo, por lo que se propone la incorporación de este término. La redacción propuesta sería la siguiente:

*“1. La Administración de la Junta de Andalucía se ordenará en forma de una red digital desplegada en todo el territorio andaluz, que facilite la integración de la información y los procesos de gestión en beneficio de la eficiencia, calidad y **agilidad** del servicio público orientado a la ciudadanía”.*

Artículo 21. La organización de la Administración de la Junta de Andalucía para el desarrollo de la Sociedad de la Información y Telecomunicaciones

Apartado 2

Este precepto recoge las funciones de la Comisión Interdepartamental de participación en el ámbito de la Sociedad de la Información y remite a un futuro reglamento la regulación de su composición y funcionamiento. Sin embargo, este Anteproyecto de Ley no prevé expresamente la creación de tal órgano por lo que si ésta es su intención, debería indicarlo explícitamente.

Por otra parte, consideramos que han de tenerse como agentes de planificación y organización de los instrumentos de la Sociedad de la Información, a los representantes de las diversas organizaciones sociales y económicas, por lo que proponemos que se prevea la creación de un Consejo de Participación de la Sociedad de la Información cuyas funciones serían, entre otras, recibir la información necesaria, elaborar propuestas y llevar a cabo la labor de seguimiento del cumplimiento de los objetivos y actuaciones realizadas para el buen desarrollo de la Sociedad de la Información.

Artículo 23. El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía

Apartado 3

Con la finalidad de ampliar el alcance de los objetivos específicos del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información, parece oportuno dar una nueva redacción a la letra b) de este apartado, suprimiendo “... *cooperativo de las empresas andaluzas*” para que la redacción final quede en los siguientes términos:

“b) Utilizar a las TIC al servicio de la competitividad y productividad del desarrollo económico de Andalucía”.

Apartado 4

En este precepto se alude a la financiación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información; dado que este tema aparece regulado con carácter genérico en un Título y Capítulo específico de la Ley parece más adecuado suprimir este apartado y prever, si así se desea, cualquier particularidad en relación a la financiación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en dicho lugar.

Artículo 25. Los Municipios y Provincias digitales

Apartado 1

En la letra c) de este apartado proponemos utilizar la palabra colectiva ***“ciudadanía”*** en sustitución de *“ciudadanos”*, para promover, en la medida de lo posible, el lenguaje no sexista, y eliminar la primera referencia al “ciudadano”. La redacción que se propone sería la siguiente: *“c) el desarrollo de un portal del municipio y provincia como proveedor de servicios para la **ciudadanía**”*.

Puesto que el artículo se titula “Los Municipios y Provincias digitales”, parece más adecuado sustituir la redacción de la letra d) *“el fomento de la i-administración municipal”* por la de *“el fomento de la i-administración **local**”*, para incluir a ambas entidades locales territoriales.

Por otro lado, la siguiente letra d) debería ser la e); la letra e), la f) y la letra f), la g), ya que es evidente el error de correlación.

Artículo 26. El establecimiento del sistema de salud en línea

En la denominación del Capítulo se acoge el término “salud digital” en lugar del de “salud electrónica” tal como se proponía en el Informe de la Consejería de Salud de 25 de abril de 2007, pero, sin embargo, en el apartado 1 se opta por el término “salud electrónica”. Convendría unificar denominaciones para evitar errores o confusiones acerca de si se alude a la misma realidad o a cuestiones diversas. Por otra parte, de la redacción del apartado 1 no queda claro si la referida “historia de salud electrónica” se refiere a la historia clínica o a algo distinto.

Apartado 2

Para compatibilizar el correcto uso del lenguaje con una utilización no sexista del mismo se propone sustituir la expresión “*o las y los profesionales*” contenida en el segundo párrafo por la siguiente: “*o las personas profesionales*”

Artículo 27. La interoperabilidad de los sistemas de información sanitaria

Parece adecuada la inclusión en este precepto de “*la telemedicina*”.

Apartado 3

Por la misma razón alegada en relación a la modificación propuesta en el artículo anterior, debería eliminarse el artículo “los” que antecede a la palabra pacientes, de tal manera que el apartado quedaría redactado de la siguiente forma: “*El establecimiento del sistema de salud en línea garantizará la movilidad de pacientes y la obtención de información y prestaciones sanitarias en el territorio*”.

Artículo 29. La educación digital en la Sociedad de la Información

En la letra a) se propone la inclusión del término “*continua*” a continuación del de “*Mejora*”, pues de esta forma el precepto se adapta mejor al lenguaje habitual en materia de búsqueda y evaluación de la calidad de los servicios en general.

Artículo 30. La integración de las nuevas tecnologías en el sistema educativo andaluz

Apartado 1

Teniendo en cuenta el contenido del precepto y lo dispuesto en el artículo 31 en relación a la Sociedad de la Información y la Universidad parece aconsejable completar la letra d) de este apartado con la expresión “*no universitaria*”.

Artículo 32. La justicia digital en Andalucía

Apartado 3

Para seguir el mismo esquema utilizado en los apartados precedentes debería incorporarse la expresión “*Se facilitarán*”. La redacción del precepto sería la siguiente:

*“3. Servicios de la Administración de la Junta de Andalucía para los profesionales de la Administración de Justicia. **Se facilitarán**, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial...”*

Artículo 35. El derecho de acceso de la ciudadanía al patrimonio digital

El precepto reconoce el acceso universal en línea a los archivos públicos que estén en posesión de la Administración de la Junta de Andalucía sin otra limitación que la de incumbir al interés general de la ciudadanía. Configurar este derecho en tales términos, recurriendo a un concepto jurídico indeterminado como es el del “interés general”, podría dar lugar a problemas prácticos innecesarios. Parece conveniente incluir en el precepto algún parámetro delimitador, especialmente si se tiene en cuenta que la Ley 30/1992, de 26 de abril ya prevé en su artículo 37 el acceso de la ciudadanía a los archivos y registros públicos.

Capítulo VI. La cooperación digital

Existe un error en la numeración de este Capítulo. Si el anterior es el Capítulo VI, El patrimonio digital, éste ha de ser el Capítulo **VII**, La cooperación digital.

Artículo 36. La cooperación digital

Apartado 3

Con la finalidad de resaltar el papel y la función de las organizaciones económicas y sociales en la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible como objetivos a los que se orienta la cooperación digital según el apartado 1 del precepto, se propone la sustitución de la

expresión “*organizaciones y movimientos sociales*” por la de “*organizaciones económicas y sociales*”, de tal manera que la redacción de este apartado sería la siguiente: “*La cooperación digital irá dirigida, preferentemente, al refuerzo de las redes de **organizaciones económicas y sociales** que luchan por el desarrollo sostenible...*”

Artículo 37. El voluntariado digital

Apartado 2

Con el objetivo de ampliar el campo de referencia de los sujetos participantes en los programas de voluntariado digital y ser respetuosos con los términos utilizados por la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado en Andalucía, se propone redactar este apartado en los siguientes términos: “*La participación en la Red de Asociaciones Digitales implicará la puesta en marcha por parte de las **entidades que desarrollan acción voluntaria** de programas de voluntariado virtual, en las condiciones...*”

Inclusión de un nuevo Título, que pasaría a ser el Título III y el actual Título III pasaría a ser el Título IV

Se propone la inclusión de un nuevo Título dedicado al Apoyo y fomento del Tejido Asociativo a través de las TIC, con una estructura y contenido similar al Título dedicado al apoyo a la competitividad y productividad de la Economía, donde se establezca el impulso a la formación del tejido asociativo sobre las TIC, la difusión de las ventajas de las TIC en las Asociaciones Andaluzas, el fomento de la integración de las TIC en las Asociaciones, así como el fomento de la innovación en el tejido asociativo y la cooperación entre las asociaciones a través de las TIC.

Consideramos que este Título es fundamental en una norma que otorga un papel relevante a las Asociaciones representativas de los ciudadanos en el desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía, que sin embargo no queda suficientemente concretado.

Artículo 43. Fomento del teletrabajo

Apartado 1

Al objeto de abarcar el conjunto de facetas de la persona que deben ser objeto de conciliación y mejorar la redacción del apartado se propone sustituir la expresión “*vida familiar y laboral*” por la de “***vida personal, familiar y laboral***” y la palabra final “*favorecidas*” por la de “***desarrolladas***”.

Apartado 2

Dado que el precepto se dirige al fomento y difusión del teletrabajo en general y realizado en cualquier ámbito, parece aconsejable redactar este apartado en los siguientes términos: “*La Administración de la Junta de Andalucía potenciará los programas que faciliten a las personas teletrabajadoras, sean profesionales liberales, titulares de microempresas, autónomos o presten servicios para cualquier empresa u organización, pública o privada, un espacio físico equipado con las herramientas necesarias para teletrabajar*”.

Artículo 48. El fomento de las infraestructuras de las telecomunicaciones

En la letra g) del precepto se propone la inclusión del término “***de Telecomunicaciones***”, por ser la expresión “Red Corporativa de Telecomunicaciones” la utilizada con posterioridad en el articulado de la Ley (art. 60).

Artículo 51. Los Programas de Infraestructuras de Telecomunicaciones

Apartado 2

Se propone la inclusión expresa de la necesidad de motivación de la insuficiencia o error en la información suministrada por la operadora que permite la suspensión del plazo de resolución en relación a los Programas de Infraestructuras de Telecomunicaciones, de tal manera que el párrafo segundo quedaría redactado en los siguientes términos: “*El plazo de*

*resolución establecido en el párrafo anterior quedará suspendido en el supuesto de que la Consejería competente, entendiendo **de forma motivada** insuficiente o errónea la información suministrada por una operadora...”*

Artículos 53 a 55. Régimen jurídico del establecimiento de las infraestructuras de las telecomunicaciones. La ocupación del dominio público. El ejercicio del derecho a ocupar la propiedad privada

En estos preceptos se reitera en gran medida y se reproduce lo previsto en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones por lo que se advierte de los posibles problemas de invasión de competencias estatales que ello puede ocasionar así como de lo inadecuado de reproducir en normas autonómicas lo ya dispuesto en leyes estatales. A este respecto, invocamos cuanto de ello hace mención el informe del Gabinete Jurídico que figura en el expediente que acompaña al presente Anteproyecto, fechado el 22 de octubre de 2007.

Disposición adicional única

La DA 3ª de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, modificó los apartados 15 y 16 del anexo I de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio, añadiendo un nuevo punto 15 e incorporando el contenido del antiguo punto 15 a un nuevo punto 16. Tal alteración normativa no ha sido tenida en cuenta en la elaboración de esta Disposición Adicional Única, por lo que se propone la siguiente redacción de los apartados 2 y 3 de la misma:

*2.- Se añade un nuevo punto **16** al apartado I del anexo de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio, en los siguientes términos:*

*“**16. Planificación de infraestructuras de telecomunicaciones**”*

*3.- El contenido actual del citado punto 16 pasa a ser el del nuevo punto **17**.*

V. Conclusiones

Este Consejo Económico y Social consciente de la importancia que tiene la regulación del desarrollo de la sociedad de la información en Andalucía, valora positivamente iniciativas como la presente dirigidas al fomento e impulso de la integración del pueblo andaluz en la misma así como a la delimitación del marco y los mecanismos que hagan posible un crecimiento de la sociedad de forma integradora y participativa.

Asimismo, el Consejo Económico y Social de Andalucía considera que corresponde al Consejo de Gobierno atender las Observaciones generales y al articulado presentadas en este Dictamen, así como, en la medida que lo considere razonable, incorporarlas al Proyecto de Ley.

Sevilla, 23 de marzo de 2009

LA SECRETARIA GENERAL DEL CES DE ANDALUCÍA

Fdo. Amalia Rodríguez Hernández

VºBº EL PRESIDENTE DEL CES DE ANDALUCÍA

Fdo. Joaquín J. Galán Pérez